

# El congreso de los EE.UU. será responsable

ANTONIO CAVALLA ROJAS\*  
LILIA BERMUDEZ\*\*

Las cifras que arroja la elección norteamericana del 2 de noviembre de 1982 son, desde cualquier ángulo que se las enfoque, absolutamente claras: ganó el Partido Demócrata, habrá en forma acentuada un dominio de esta agrupación política supuestamente "liberal" en el Congreso número 98 de los Estados Unidos de América.

Sin perjuicio de que *stricto sensu* la alta abstención transforma ese hecho electoral, más que en un "plebiscito", en un verdadero "muestreo de opiniones", éste no puede ser ignorado en ningún análisis, pues representa de alguna manera que hay que dilucidar la opinión del 40 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto de los EU, después de dos años de administración republicana. En esa elección los demócratas obtuvieron un total nacional de votos del 55 por ciento contra 39 por ciento de los republicanos,(1) esto es, 16 puntos porcentuales más arriba y un ascenso de más de 10 puntos de lo que obtuvo ese partido hace dos años en la elección presidencial. Lograron ganar 26 asientos más en la Cámara de Representantes, aumentando la diferencia que poseían hasta llegar a la cifra de 267, contra 166 de los republicanos. En el Senado, si bien sólo disminuyeron el control de Reagan de 55 a 54 puestos (eran 45 de 100, ahora son uno más), ello ocurrió así porque los republicanos renovaban solamente 13 cargos y los demócratas exponían 20, en estados más bien de opinión pública conservadora y, aun así, en cinco lugares, los candidatos del gobierno ganaron por escasísimos márgenes a sus oponentes, a pesar de los pronósticos contrarios de unos y otros

antes de la elección.

En la elección de gobernadores, los resultados son más abrumadores: los demócratas ganaron 7 gubernaturas más, quedando así con el "control" de 34 de 50 estados, entre ellos los más populares. Si a ello se agrega los referenda sobre diversos asuntos que se dirimieron por voto popular en varios estados, los demócratas ganaron prácticamente el 90 por ciento de los que los apoyaron nítida y abiertamente, saliendo derrotados los republicanos y el presidente en casi todos ellos.

Las cifras, pues, son contrarias al ejecutivo y demuestran un mandato claro al nuevo Congreso de moderar las políticas "reaganistas", en todos los aspectos, incluida, por cierto, la política exterior. Esto es un hecho insoslayable, mirado desde cualquier ángulo. Tal mandato se ve acentuado por ciertos elementos que los resultados provocaron o acentuaron en el juego político de poder en el interior del proceso de decisiones norteamericano:

1. Ha habido una derrota de casi todos los candidatos ligados estrechamente al Presidente Reagan. Esta derrota se produjo tanto en el interior del Partido Republicano (en las elecciones primarias, para designar los candidatos), como en la relación entre republicanos y demócratas. Perdieron más puestos los "reaganistas", dentro de una campaña en la que el conjunto del Partido Republicano intentó no ligar su suerte totalmente a las políticas del presidente.

2. En el Partido Demócrata el asunto fue al revés: fue desplazado desde las primarias el grupo de parlamentarios con los cuales el presidente contó en la House of Representatives (Cámara de Diputados) para apoyar sus políticas (los Boll Weevil).

3. El Presidente Reagan, que en la última parte de la campaña salió a defender a sus candidatos y a sus políticas, aparece francamente derrotado en su prueba popular de "medio-término". Su imagen de "gran comunicador", invencible en la tarea de convencer al Congreso y a la opinión pública de la justeza de sus posiciones, ya no sirve más como

argumento.

## LAS RELACIONES DEL CONGRESO CON EL EJECUTIVO Y LA GUERRA

Sin pretender aquí repetir lo que se expone en los buenos textos de Ciencia Política comparada, es necesario recordar que el sistema político norteamericano es nítidamente presidencialista en política exterior y de defensa. Sin embargo, los abusos cometidos por todos los presidentes desde John F. Kennedy en extralimitar sus atribuciones —cuyo precio más alto fue la escalada bélica a espaldas del Congreso en contra de los pueblos de Indochina, y cuyos escándalos más sonados fueron Watergate y la intervención contra Allende en Chile— llevaron a que las sucesivas "sesiones" (bianuales) del Congreso entregaran a éste un conjunto de leyes orientadas a que el poder legislativo compartiera o fiscalizara muy estrechamente a la Casa Blanca.

Esta situación de juego de atribuciones es mucho más clara en relación a los hechos de guerra, donde los legisladores poseen poderes inequívocos para impedir que un presidente use las fuerzas armadas norteamericanas y otros mecanismos menos visibles (asesorías, "ayudas" económicas, acciones encubiertas, etc.) para intervenir en un país extranjero. Son estas leyes o enmiendas de leyes las que, a pesar de su retórica anti-intervencionista y/o antibélica, no fueron invocadas por los congresistas "liberales". A nuestro juicio, en la 97 legislación no se trató de desconocimiento, lo que por lo demás habría sido bastante extraño. Por el contrario, según consta en más de un documento,(2) los senadores y diputados contrarios a las políticas presidenciales conocían perfectamente sus propias atribuciones, pero se negaron a usarlas. Dicho de manera más descarnada: los diputados y senadores liberales, en el caso concreto de la guerra en Centroamérica, hicieron caso omiso de sus propias atribuciones como legisladores, probablemente por un cálculo político erróneo. Ante la ausencia de una política alternativa a la de Reagan para defender los "intereses

\* Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Presidente del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y miembro del Council del International Peace Research Association (IPRA).

\*\* Investigadora del Proyecto "Lázaro Cárdenas (UNAM-PEMEX-CO-NACYT) y del CELA de la FCP y S de la UNAM.

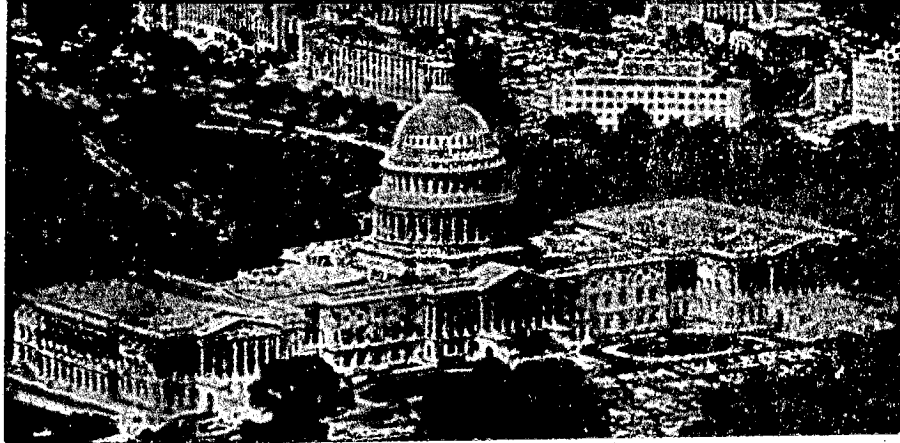
norteamericanos” en la región (como los ve la clase dominante de ese país, se entiende), prefirieron un “bajo perfil” o declaraciones para consumo de votantes radicalizados, que una acción legal que a estas alturas tendría las manos atadas al Presidente Reagan en su carnífera intervención en la región.

Esa situación de incertidumbre, si alguna vez existió —pues hubo encuestas en agosto de 1982 que arrojaban un 79 por ciento de opiniones contrarias a “una intervención con fuerzas norteamericanas en Centroamérica”— ya no puede ser invocada. El electorado norteamericano ha dado un mandato lo suficientemente claro como para no tener dudas: se quiere que se detenga a un presidente irresponsable a través de un Congreso responsable; que no haya nuevas escaladas bélicas (como en Vietnam) a espaldas del pueblo norteamericano y de sus representantes directos en la Cámara de Diputados y en el Senado.

## LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONGRESISTAS

Que los Estados Unidos se encuentran en una escalada intervencionista en Centroamérica, no requiere pruebas a estas alturas: las han dado los propios funcionarios de la Administración Reagan y los medios de comunicación norteamericanos. Se trata de la vieja doctrina, remozada, es cierto, de la reacción flexible, en sus tramos bajos. Hay ayuda económica y militar por todos los medios, a todos los países centroamericanos, con la excepción de Nicaragua, a la que se trata de estrangular. Detener esa escalada es responsabilidad legal del Congreso y mucho más aún —porque lo es también moralmente— de los que se autodenominan liberals, anti-intervencionistas, antibelicistas. Su juego ya no tiene cabida. Antes era posible hablar y declararse impotente ante el poder de la Administración Reagan. Ahora, no. Ni siquiera por cálculo político.

Lo que parecen ignorar los funcio-



narios y mass media de los EE.UU. es precisamente que la reacción flexible tiene otro tramo —si fracasa el actual— de intervención con fuerzas masivas: el US Caribbean Command y la Rapid Deployment Force. Es el escalón propio, con sus comandos en Key West y en Tampa, respectivamente. Son nuevas fuerzas invasoras que los señores congresistas han dejado construir, desde Carter hasta nuestros días. (3) Serían miles de hombres y equipos desplazados en el nuevo tipo de “batalla” para fuerzas convencionales, puesta a prueba en el Líbano por los israelitas... Y que la actual estrategia es un fracaso, parece bastante evidente: la fuerza guerrillera crece en El Salvador y en el régimen sandinista se consolida —y ambos han sido definidos como enemigos—. Y, claro, si los señores legisladores no intervienen ahora, un Reagan desprestigiado y en declive puede echar mano de un conflicto externo para montar su popularidad... por noviembre de 1983, iniciando su campaña electoral contra Walter Mondale. ¿Qué importan algunos miles de muertos centroamericanos y “algunos centenares” (según sus cálculos, no los nuestros) norteamericanos, si ello da paso a una consolidación del “New New Deal” prometido y aún pendiente?

El señor Secretario de Estado, George Shultz, en su interesante discurso del 17 de noviembre ante la OEA, pregunta: “¿Por qué no ir a un acuerdo entre los países centroameri-

canos, sobre la base de la reciprocidad y la verificación, a reducir sus números (de hombres y armas) a un nivel adecuado o a cero?” (4) Claro que el señor Shultz olvidaba un par de detalles. Que si de Centroamérica se trata, según la Administración que él representa, hay unas fuerzas norteamericanas que tienen hipótesis de guerra sobre la región, y que deberían entrar en este trato, con reciprocidad y verificación de la comunidad internacional o sus mandatarios. El otro detalle que pareciera previo es que el Congreso de los EE.UU obligara a su Administración —y cumpliera, por fin, con su deber legal—, a parar toda la intromisión norteamericana en la región, la que, por cierto, es la fuente principal de los “números”. En segundo lugar, habría que exigirle al señor Shultz y a su gobierno que acepte lo que le informan a diario la estación de la CIA, la DIA (que tiene cosas tan perfectas como la fotografía aérea de satélites) y sus propios aliados: que en El Salvador no es posible hablar de “números” sin contar al FMLN-FDR, y que ello no es cuento del “comunismo internacional” sino afirmación sensata de la “comunidad internacional” (cosa muy distinta, por cierto), manifestada en su Asamblea de diciembre de 1982.

¿Quién es el responsable? ¿Reagan? No, ya lo sabemos: su “lógica” es la de la guerra, la de la fuerza. Por ello fue rechazado y por eso ganaron los demócratas. Es el Congreso el responsable. Ahora.

## NOTAS

- (1) Nuestras fuentes en el caso de las cifras son los periódicos *The Washington Post*, *The New York Times*, *The Washington Star* y *The Wall Street Journal*, y las revistas *Times*, *Newsweek* y *US News and World Report*, del mes de noviembre de 1982.
- (2) El senador Kennedy usó uno de ellos —aún vigente— como sanción en contra de la violación a los derechos humanos por el régimen de Pinochet en Chile y el régimen de las fuerzas armadas en Guatemala; el senador Edward Zorinsky recibía el 27 de julio de 1982 un informe del Contralor general de la República en el que, por petición suya, le informa de flagrantes violaciones de la Administración Reagan en el caso de El Salvador. Ver the Comptroller General of the United States.

**Applicability of Certain US Laws that Pertain to US Military Involvement in El Salvador.** Doc. B-207901; GAO/ID-82-53. US General Accounting Office; July 27, 1982 (Wa.).

- (3) Hemos desarrollado ampliamente el punto en nuestro libro **Estrategia de Estados Unidos frente a la Revolución Centroamericana: de Carter a Reagan**. En prensa, Editorial Nuestro Tiempo (México).
- (4) George P. Shultz, Secretary of State. **Speech Before The General Assembly of the Organization of American States**. November 17, 1982 (versión de la Embajada norteamericana en México, p. 3).